

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por ARLEY HUMBERTO PATIÑO GUERRA contra RAÚL HUMBERTO ORREGO OSORIO y LUZ EDILIA BOLÍVAR BOLÍVAR en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio “La perrada de Humberto” (Radicado 05001-31-05-015-2018-00650-01).

ANTECEDENTES

El demandante pretende por vía judicial el reconocimiento de un contrato de trabajo ejecutado con los demandados entre el 20 de septiembre de 2010 y el 14 de marzo de 2017, para que en consecuencia se disponga el pago de las prestaciones sociales, las vacaciones, la indemnización por despido sin justa causa, los aportes al Sistema de seguridad Social en Pensiones, los perjuicios por no suministro de la dotación de vestido y calzado de labor, la indemnización por falta de pago contemplada en el artículo 65 del CST, la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación de cesantías a un fondo, el auxilio de transporte y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones expuso que los demandados son esposos y propietarios del negocio familiar “la perrada de Humberto”, ubicado en la ciudad de Medellín, y el cual tiene como objeto la venta de comidas rápidas.

Que con ellos se vinculó laboralmente por medio de un contrato verbal a término indefinido el 20 de septiembre de 2010, para prestar los servicios personales en el mentado establecimiento de comercio en el cargo de oficios varios en un horario de lunes a lunes de 6:00 p.m a 3:00 a.m., con un día de descanso a la semana, devengando la suma de \$50.000 diarios, lo que ocurrió de manera continua e ininterrumpida hasta el 14 de marzo de 2017 cuando se finalizó sin justa causa la relación sin recibir la liquidación de sus prestaciones sociales, que nunca fueron canceladas, así como tampoco tuvo afiliación al Sistema de Seguridad Social. .

Los demandados pese a ser citados para la notificación en debida forma, la cual fue recibida de forma física, no comparecieron al trámite, siéndoles designado curador *ad litem* para su representación judicial. La nombrada por escrito arribado se pronunció manifestando no contarle la mayoría de los fundamentos de hecho revelados, precisando que el establecimiento de comercio involucrado es de propiedad exclusiva de Luz Edilia Bolívar sin que las responsabilidades se extiendan a Raúl Humberto Orrego. Formuló como excepciones de fondo las que denominó: prescripción, inexistencia de la obligación e imposibilidad de condena en costas.

El Juzgado de conocimiento que lo es el Quince Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia que profirió el 11 de mayo de 2022, DECLARÓ la inexistencia de la relación laboral pregonada, DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación y ABSOLVIÓ a los demandados de todas las pretensiones de la demanda. CONDENÓ en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

La activa aspira que se revoque tal determinación dado que a su juicio los elementos del contrato de trabajo si fueron demostrados, en tanto la prestación del servicio se acreditó por medio del testigo traído al proceso, mismo que resultó espontáneo en su dicho y no fue preparado y que además carece de algún interés en las resultas de este proceso, sin que sea viable restarle validez por recordar con precisión los extremos temporales del contrato, pues también recordó con nombres y apellidos los compañeros de trabajo para la misma época, lo que retira cualquier sospecha, señalando que de una vinculación

informal es casi imposible ser probada por medios documentales, existiendo otros medios para satisfacer esa carga. Adujo que las fechas de inicio y terminación, así como la remuneración fueron probados con el dicho del demandante y el testigo, pero que en todo caso, de no valorarse la suma salarial aducida, debe tenerse como tal al SMLMV en virtud al horario cumplido. Advirtió que en este caso se da la inversión de la carga de la prueba por lo que correspondía a los demandados desvirtuar la relación de trabajo con el efectivo pago de los emolumentos pedidos, cuestionando que se premie a un empleador renuente a comparecer al proceso a fin de aclarar las condiciones en que se ejecutó el contrato.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Con base a lo anterior y a que en esta instancia se encuentran en discusión todos los presupuestos fácticos planteados se tiene que el problema jurídico consiste en esta oportunidad determinar si entre el demandante y los convocados Luz Edilia Bolivar y Raúl Humberto Orrego existió una vinculación de tipo laboral con desarrollo entre el 20 de septiembre de 2010 y el 14 de marzo de 2017, que conlleve a determinar la procedencia o no de las obligaciones laborales enunciadas.

En torno a lo que se menciona, cabe rememorar que como es bien sabido, existen reglas claras y precisas que las partes deben y tienen que cumplir o propender porque se cumplan, si aspiran a que sus peticiones sean reconocidas. Entre las más relevantes deben traerse a colación las establecidas en los artículos 164 y 167 del C.G. del P. (Ley 1564 de 2012) aplicables por analogía al procedimiento laboral, las mismas que consagran el principio de la necesidad de la prueba y la regla de la carga de la prueba, respectivamente.

Por lo demás, es también del caso recordar que conforme al mandato del artículo 61 del C. P. del T. y de la S. S., los jueces de instancia forman libremente su convencimiento, dentro de un marco básico conformado por los principios científicos que informan la crítica probatoria, las circunstancias relevantes del proceso y la conducta procesal de las partes, tal como en infinidad de oportunidades lo ha dicho y reiterado la jurisprudencia laboral.

En el asunto, la juez de instancia concluyó la insatisfacción de la carga probatoria de quien promovió la presente acción judicial, en cuanto concluyó la inexistencia de la relación laboral en los extremos temporales advertidos desde el escrito de demanda, atendiendo a que contó de manera exclusiva con un testigo como prueba que no le generó la convicción necesaria para impartir condena.

Esta Sala de Decisión comparte lo concluido por la Juez, en la medida que el testimonio del señor Luis Alfonso Vargas Ruiz se constituye en el único medio de prueba tendiente a comprobar la relación laboral que se aduce se presentó entre 2010 y 2017, con quien en efecto no es posible llegar a la certidumbre e infalibilidad de los hechos; todo esto, a partir de la inspiración en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito conforme lo pregonan los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, siendo obligación del Juez procurar un mínimo de objetividad en el testimonio, analizando la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y la forma como llegó a su conocimiento en conjunto con la respuesta que se dé a las preguntas (ver SU129-2021), teniéndose la facultad de apreciar libremente las pruebas, mientras que ello no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos (Ver SL,05 nov.1998, rad.11111, SL2049-2018 y SL360-2021).

El deponente señaló que el actor estuvo desempeñándose en oficios varios dentro del local comercial “*la perrada de Humberto*” entre el 20 de septiembre de 2010 y el 14 de marzo de 2017, señalando tener muy buena memoria para recordar esas fechas ya que él había ingresado antes y salió días después del

retiro de su compañero. Explicó y enfatizó que desde el inicio de la relación Arley Humberto devengó \$50.000 diarios, contrariando el dicho del actor quien dijo que inició devengando \$27.000 y que tal suma fue incrementándose hasta llegar a los \$50.000, que la prestación era personal y bajo órdenes de Raúl Darío el administrador, Luz Edilia y Raúl Humberto como dueños y Johana como hija de la pareja, sin que para el momento del despido donde les dijeron que no había más trabajo haya recibido pago alguno por prestaciones sociales.

En el asunto que nos convoca, para esta Sala de Decisión no se encuentra suficiencia en la declaración del deponente, de quien si es posible cuestionar el recuerdo exacto de unas datas que no son de su atribución y que corresponden a situaciones acaecidas entre hace 4 y 12 años, porque si bien no existen indicios del interés que pregone en este proceso, no es natural conforme a la experiencia tal precisión, siendo observada duda en la respuesta de las fechas propias de su caso (Min 44:47 Archivo 08), y una seguridad al anotar la data inicial del vínculo del demandante (Min 44:29 Archivo 08) referenciando el 20 de noviembre de 2010, lo que pudiera reflejar que la sabía de memoria, sin que acudiera a un evento particular que encauzara su recuerdo y lo hiciera razonado, encontrando disparidad y obstáculo en su evocación en un elemento más simple como lo es la retribución pese a que se adujo que recibían igual cantidad como compañeros de trabajo, paso del tiempo entonces que obligaba a la activa acorde a la carga que le asistía a reforzar el material probatorio con el propósito de brindar plena certeza frente a la prestación del servicio desde el año 2010, de modo que se contara con los elementos adecuados, calificados y aptos para ponderar, analizar y comparar el dicho del testigo con otros medios demostrativos que sirvan de apoyo o descarte del dicho, debiendo adoptarse la decisión con base a un fundamento tan sólido que no quede duda de la correlativa relación que dé lugar al reconocimiento de estipendios laborales que en principio corresponden a un lapso de poco más de seis años, lo que puede aparejar a cargo de quien pudo fungir como patrono, la asunción de sanciones e indemnizaciones onerosas, todo lo que debe estar soportado y sustentado en mecanismos probatorios contundentes disímiles al dicho del propio demandante, el que de ninguna manera puede constituirse en tal en su propio

beneficio, y estar ante un panorama tan claro, que no exista sospecha sobre la justicia y legalidad de la imposición.

Es verdad que en asuntos de similares contornos fácticos y relacionados con los compañeros de trabajo que el testigo Vargas Ruiz anunció en su declaración, han sido definidos en este Tribunal con decisión favorable a los intereses del trabajador, pero es que cada asunto debe ser analizado desde la particularidad de cada demandante y de cara a las probanzas que haga valer en el trámite, y en este caso, se quedó corta la evidencia para dar prosperidad a lo pedido.

Tampoco es atendible admitir el argumento de la inversión de la carga de la prueba, pues ello así ocurriría de haberse probado la prestación personal del servicio de Arley Humberto Patiño Guerra en favor de los convocados, lo que esta Sala no encontró conseguido, por manera que la presunción que se tiene establecida en el artículo 24 del CST resulta inoperante para esta cuestión, recayendo en cabeza exclusiva del demandante mostrar que sus afirmaciones coincidían con la realidad, que al no lograrse, mal pudiera acudirse a la renuencia de los demandados para intervenir en este escenario para dar razón a los dichos de la demanda.

De modo que, al ser ausente el material probatorio idóneo, se deja en entredicho las manifestaciones y fundamentos fácticos del promotor del juicio, de lo que resulta imposible dar cabida a una relación laboral existente en los tiempos anunciados, lo que deriva en que no pueda hablarse de un incumplimiento laboral, que conlleva a la improcedencia de la imposición de alguna condena.


En esa línea, la decisión del juzgado de conocimiento venida en apelación habrá de ser confirmada, con imposición de costas en esta instancia a cargo del demandante, fijándose en esta sede las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada de fecha y procedencia conocidas. Las costas son como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
SIN FIRMA POR PERMISO AUTORIZADO


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501520180065001
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	ARLEY HUMBERTO PATIÑO GUERRA
Demandado:	HUMBERTO URREGO OSORIO
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	4/05/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 5/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario